



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
"Al servicio de la justicia
y de la paz social"

S - 126

Procedimiento: Verbal

Demandante: Sendy Milena Gil Arias

Demandados: Jairo Hernán Castañeda Bermúdez y/o

Radicado Único Nacional: 05360 31 03 001 2018 00198 02

Procedencia: Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí

Decisión: Adiciona y modifica sentencia, confirma lo restante. Ordena remitir copia a Fiscal Delegado.

Medellín, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Cuestión: Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí.

Temas: responsabilidad por el hecho propio, por el hecho ajeno y en el ejercicio de actividades peligrosas, daño a la vida de relación y perjuicio moral, su cuantificación.

Procedente del Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí, por apelación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021, ha llegado a esta Corporación el proceso verbal promovido por la señora Sendy Milena Gil Arias en contra de Jairo Hernán Castañeda Bermúdez, Luis Fernando Cano Díaz y Automóviles Itagüí S.A.S, a través del cual la parte demandante pretende:

"PRIMERA: (Q)ue se declare que el señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez es responsable directo de todos los perjuicios causados a la demandante Sendy Milena Gil Arias con el asesinato doloso de su compañero de vida Jeferson Duvan Franco Cardona, delito por el cual fue condenado por la Juez Primera (1ª) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí (sic)"

SEGUNDA: (Q)ue se declare que el señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez cometió ese delito en momentos en que, en calidad de conductor, laboraba para la empresa Acosta Quiróz y CIA (...) hoy Automóviles Itagüí S.A.S, manejando el micro bus de servicio público TRD 182 afiliado a la misma y de propiedad, en ese momento del señor Luis Fernando Cano Díaz, siendo consecuencia el referido homicida, dependiente y subordinado de estos; tanto la compañía como el dueño del vehículo para la época de los hechos, son civilmente responsables de los perjuicios causados con el delito referido."(sic fl. 18 C 1)

Lo anterior, para que los demandados sean condenados de manera solidaria a pagar los perjuicios supuestamente sufridos por la demandante, discriminados de la siguiente manera:

- \$1.475.500,00 por concepto de daño emergente.
- 100 SMLMV para compensar el perjuicio moral.
- 100 SMLMV para compensar el daño en la vida de relación.

Todo lo antedicho, con fundamento en hechos que así se compendian:

Que la demandante convivió de manera permanente e ininterrumpida con el señor Jeferson Franco Cardona, de quien dependía económicamente, por más de 6 años y hasta la fecha de su muerte ocurrida el 10 de julio de 2015.

Que el señor Franco Cardona murió ese día cuando conducía el taxi de placas TSK 221 y de pronto fue "cerrado" por el bus de servicio público de placas TRD 182 conducido por Jairo Hernán Castañeda, afiliado a Automóviles Itagüí S.A.S y propiedad de Luis Fernando Cano Díaz, momento en el cual se

presentó un altercado físico entre ambos conductores que terminó con la muerte del "taxista", debido a una "puñalada en el corazón" que le propinó el demandado.

Que en acta de Policía quedó constancia de que al señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez se le incautó el arma homicida y el vehículo "que conducía y con el que provocó el altercado que terminó con la muerte del occiso" (sic hecho tercero de la demanda).

Que el señor Castañeda Bermúdez firmó un preacuerdo con la Fiscalía 235 Seccional de Itagüí, en el marco del cual "confesó" el delito de homicidio doloso del señor Jeferson Duván Franco Cardona e indemnizó a su señora madre María Lucely Franco Cardona, gracias a lo cual fue condenado por el Juzgado Primero Penal con Función de Conocimiento de ese Municipio a 8 años de prisión, término durante el cual, entre otras cosas, se le prohibió la conducción de vehículos automotores.

Que en respuesta a una petición radicada a la sociedad Automóviles Itagüí S.A.S se pudo constatar que el "homicida" era su empleado para la fecha de los hechos, esto es, estaba bajo su subordinación y dependencia.

Que la ARL Positiva, a la cual estaba afiliado el fallecido, determinó que su muerte se presentó en el marco de un accidente de trabajo y, por tanto, reconoció a la demandante la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera permanente, puesto que como lo afirmaron en declaración "extrajuicio" los señores Johana Idilia Ramírez Vásquez y Miguel Egidio Velásquez Méndez, la demandante compartió con su compañero fallecido techo, lecho y mesa en la calle 63 A número 59 A 49 de Itagüí, convivencia en la que el señor Franco Cardona era el absoluto responsable del sostenimiento económico.

Que la relación de la demandante con el fallecido siempre fue sólida y armónica, como se puede concluir con el análisis del dictamen psicológico aportado con la demanda y dejan ver las redes sociales de la pareja a las que "subían fotografías que daban cuenta de su idilio", por lo cual la muerte de su compañero le ha causado a la actora graves perjuicios materiales, morales y en su vida de relación que *"tienen que ser indemnizados solidariamente y de*

manera integral con lo manda el artículo 16 de la ley 446 de 1998, tanto por el homicida Jairo Hernán Castañeda Bermúdez que es el directamente responsable, como por Automóviles Itagüí S.A.S y Luis Fernando Cano Díaz, en calidad de terceros civilmente responsables” (sic hecho décimo demanda, fls. 15-16)

RÉPLICA

La demanda fue admitida por auto fechado el 10 de agosto de 2018 (fl 125 C 1), y notificados de la misma los demandados, procedieron a contestarla de la siguiente manera:

Automóviles Itagüí S.A.S (fls. 160 y siguientes).

Comenzó manifestando que nada le constaba sobre las circunstancias personales de la demandante o del fallecido y, sobre el suceso base de la demanda, alegó que no ocurrió en el marco de un siniestro vial, tampoco se trató de un asunto vinculado con su objeto social o similar, puesto que más bien tuvo lugar de manera aislada y ajena a la labor contratada con el señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez, razones por las que no existe solidaridad alguna que la obligue a responder por los supuestos perjuicios.

Al respecto, agregó que como sociedad no participó en la actuación penal y tampoco fue citada porque allí se juzgó simplemente una *"riña entre dos personas"*, tal como se determinó en la investigación de la Fiscalía a través de la declaración del señor Ronaldo Agudelo Restrepo, quien le aseguró a esa autoridad que el *"conductor del taxi (Duvan) le pegaba puños y patadas al colectivo, para que el conductor se bajara a pelear"* (fl. 160). Luego, aclaró, aunque el señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez era empleado suyo, para el momento de los hechos no estaba cumpliendo órdenes de la empresa y, por el contrario, se trató de un asunto totalmente ajeno a su rol laboral por demás prohibido en el reglamento interno de trabajo, en el cual se proscribe el porte de todo tipo de armas.

Así las cosas, el hecho de que hubiere sido incautado al señor Castañeda Bermúdez el "arma homicida" y el vehículo tipo bus que para entonces conducía, no es indicativo sino de que la autoridad cumplió con las

obligaciones que le impone la ley en ese tipo de casos, más la empresa no está llamada a responder por ese acontecimiento.

Con base en todo ello, propuso las que llamó “excepciones” de “inexistencia de causa para pedir”, “buena vigilancia, capacitación y normas de comportamiento de la empresa”, “inexistencia de conducta dañina de parte de los demandados”, “culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero”, “ruptura de nexo causal”, “cobro en exceso de los perjuicios”, “compensación” y “prescripción y caducidad”.

Curadora de Jairo Hernán Castañeda Bermúdez y Luis Fernando Cano Díaz (fls. 198 y siguientes).

Contestó con la expresión “que se pruebe” a todos los hechos de la demanda, mientras que con respecto a las pretensiones manifestó que se debían probar sus presupuestos, pero que no tenía elemento alguno para proponer excepciones.

De la actuación en esta instancia con ocasión de la integración del contradictorio

Aunque el señor juez *a-quo* mediante auto proferido el 26 de noviembre de 2020 declaró la nulidad de lo actuado con respecto al señor Luis Fernando Cano Díaz, por proveído del 18 de diciembre de ese año se revocó tal determinación y, por tanto, lo actuado a su respecto quedó en firme.

SENTENCIA IMPUGNADA

Trabada la relación procesal, se dictó sentencia en la que se resolvió lo siguiente:

“(P)RIMERO: DECLARAR civil y extracontractualmente responsable al señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez de los daños acaecidos a la señora Sendy Milena Gil Arias, con ocasión del homicidio del señor Jefferson Duvan Franco Cardona, compañero permanente de aquella, según las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al citado señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez en favor de la señora Sindy Milena Gil Arias, al pago de los daños acreditados en la actuación consistente en los siguientes:

Daño Moral: Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO: Exonerar de responsabilidad a los demandados Automóviles Itagüí SAS y al señor Luis Fernando Cano Díaz, según las consideraciones expuestas.

CUARTO: Condenar en costas a la parte vencida, señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez. Se incluye como agencias en derecho la suma equivalente a dos millones de pesos (\$2.000.000,00) a favor de la demandante.

QUINTO: Sin costas a favor de los demandados Automóviles Itagüí SAS y Luis Fernando Cano Díaz, según lo expuesto.”

Para decidir de la manera como lo hizo, el Juzgador comenzó con un recuento de todo lo transcurrido el proceso y posterior a ello afirmó que en la fijación del litigio quedaron acreditadas las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte del señor Jeferson Cardona Franco, dicho lo cual pasó a plantear como problema jurídico el consistente en determinar si había relación de causalidad alguna entre los hechos y el daño reclamado en la demanda.

Procedió, entonces, a realizar un resumen sobre alegatos presentados por los apoderados de las partes, para a partir de allí concluir que se encontraban reunidos los presupuestos procesales.

Planteado el panorama, realizó algunas consideraciones sobre la responsabilidad civil por el hecho propio y la originada en el ejercicio de actividades peligrosas como la conducción, la obligación de todo actor vial de comportarse de forma adecuada y la obligación que nace para el transportador de responder por los perjuicios que se causen en la prestación del servicio.

En consecuencia, aseguró que en materia de responsabilidad civil extracontractual debe acreditarse el hecho, el daño, el nexo causal y el factor de imputación. Entonces, dijo que en la responsabilidad por actividades peligrosas a la víctima le basta con probar el daño y su relación de causalidad con el hecho, más al victimario le corresponde probar una causa extraña para exonerarse.

Sentadas las bases dogmáticas de la sentencia, recordó que el señor Jairo Hernán Castañeda le causó la muerte al señor Jeferson Cardona en medio de un altercado que ambos tuvieron cuando se desempeñaban como conductores de vehículos de servicio público, tal como quedó registrado en el protocolo de necropsia y en las actuaciones penales. Luego, no queda duda de que en efecto la causa determinante de la muerte del segundo, fue el actuar delictivo del primero.

Empero, aseguró el Juez, el verdadero problema radica en determinar si las consecuencias de esa conducta se deben extender a la empresa demandada y al propietario del vehículo conducido por el victimario para la fecha de los hechos, en lo cual dijo que todo actuar de este fue completamente ajeno a ellos. Se trató de un actuar autónomo y voluntario sin relación causal con la actividad de transporte, por más que la riña fuera producto de un "malentendido" entre ambos actores viales.

En ese punto, citó la sentencia del 12 de enero de 2018 (radicado 11001-31.03.027-2010-00578-01 M.P. Ariel Salazar Ramírez), para explicar que el demandado puede exonerarse cuando acredita que el daño fue causado por un tercero, bajo circunstancias que no estaba en obligación o posibilidad de vigilar o evitar, tal como podía también concluirse de la lectura de la sentencia dictada el 6 mayo de 2016 dentro del proceso con radicado 54001 31 03 004 2004 00032 01, porque si bien en las empresas afiliadoras se presume la condición de guardián, ello es así en materia de la dirección y control de la actividad transportadora.

Además, indicó el Juez, el mismo señor Jairo Hernán aseguró no tener antecedentes que debiera conocer la empresa a la hora de contratarlo, más que el homicidio base de la demanda obedeció a su voluntad, por lo cual la responsabilidad civil es atribuible a él.

Por ello, establecida la relación sentimental entre la demandante y el fallecido, dispuso la condena ya reseñada en la que negó el daño emergente por estimar que no había prueba alguna que lo acreditara, sin perjuicio de que en el momento de liquidar las costas se tuvieran en cuenta los gastos realizados con ocasión del proceso. Además, el Juez negó el daño a la vida de relación porque estimó que no existía alguna disminución o anulación de las capacidades de la demandante para enfrentar la vida, gracias a lo cual el sufrimiento narrado en la demanda encuadraba simplemente en el daño moral.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión la parte demandante se alzó en su contra, alegando como reparos concretos los que pasan a individualizarse (**en audiencia y “complementados” en los tres días siguientes**).

PRIMERO: “no estoy de acuerdo con la exoneración que se hace de los “patrones” del señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez”, esto es, la sociedad demandada y Luis Fernando Cano Díaz porque “resulta y sucede” que el Despacho omite tener en cuenta que el homicidio doloso ocurrió en horas laborales, por lo que esos demandados eran los guardianes de la actividad ejercida por tener poder de dirección y control que se les “desbocó” porque omitieron revisar el material con que “andaba este señor”, es decir, un “cuchillo de cachá naranjada”.

Además,

“si el juez hubiese cumplido la ley específicamente lo que le ordena la parte final del inciso primero (1º) del artículo 280 del código general del proceso, que lo obliga “siempre” a calificar en la sentencia la conducta procesal de las partes, habría tenido que concluir, que la conducta desplegada por los civilmente responsables a través de su apoderado, trae como consecuencia necesaria por mandato legal expreso, que se presumieran ciertos los hechos sobre los cuales versaron las preguntas asertivas del interrogatorio y de igual manera se presuman ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda (Confesión Presunta) y las preguntas que no fueron asertivas en el

interrogatorio, o los hechos no susceptibles de confesión, se tienen que apreciar en virtud de la negativa a responder o de las respuestas evasivas en indicio grave en contra del interrogado.” (Escrito reparos concretos)

SEGUNDO: “tampoco estoy de acuerdo con omitir la condena a daño de vida de relación”, puesto que no está subsumida en el daño moral en tanto que son “dos cosas diametralmente diferentes”, tanto como que un perjuicio afecta la órbita externa y otro la interna. En ese punto, a su juicio, la perito profesional en psicología fue bastante clara en concluir que la demandante se “aisló”.

TERCERO: “nos encontramos frente a una muerte violenta y durante todo el día asistimos a una sistemática discusión del Dr. Juan Felipe Ruiz donde insistía que los hijos eran de tres padres diferentes”, lo que vulnera su integridad y dignidad como mujer. Se trata de verificar que a mi mandante la privaron de poder tener una vida con la pareja que ella quería y con la que se “entendió”. Entonces, “hombre, que 50 salarios mínimos vale eso, me parece una suma muy baja en este monto”, refiriéndose al perjuicio moral.

CUARTO: “se niega el daño emergente, cuando a folios 68, 69 y 70 existe prueba documental que fue debidamente decretada”, donde se sustenta el valor solicitado por concepto de ese perjuicio.

DE LA SUSTENTACIÓN EN ESTA INSTANCIA (DECRETO 806 DE 2020)

El recurso de apelación fue admitido mediante auto fechado el 31 de agosto de 2021. El 7 de septiembre corriente la parte apelante allegó en término vía correo electrónico el memorial de sustentación, con el cual acompañó constancia de haber agotado el trámite previsto en el parágrafo del artículo 9º del decreto 806 de 2020.

En el mentado memorial, básicamente, reiteró los argumentos que utilizó para introducir los reparos concretos adicionales dentro de los tres días siguientes a la audiencia en que se dictó la sentencia de primer grado.

PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con lo decidido y argumentado por el juzgador de Primer Grado, y teniendo en cuenta los reproches de la parte apelante, de la siguiente manera pueden plantearse los problemas jurídicos que debe abordar la Sala en esta ocasión:

¿En realidad no existe solidaridad entre el señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez, Luis Fernando Cano Díaz y Automóviles Itagüí S.A.S en su calidad de propietario y afiliadora del vehículo con placas TRD 182, como lo concluyó el juzgador de primer grado? o, por el contrario, como lo estima la apelante, ¿están acreditados todos los presupuestos para condenarles solidariamente por las consecuencias derivadas del homicidio cometido por el directo responsable, gracias a que ambos tenían para la fecha de los hechos la calidad de guardianes de la actividad de conducción desplegada por este?

Además, en directa relación con el mentado problema, conviene precisar en ese mismo camino si en verdad

¿aplica en este caso el régimen del guardián desarrollado por la jurisprudencia para el caso de las actividades peligrosas?

Ese par de problemas deben ser resueltos en primer lugar, porque de ello depende la determinación del régimen dogmático que gobierna el caso y, por ende, de los eventuales responsables, gracias a que los demás reparos se vinculan con la indemnización de los perjuicios. Luego, resuelto ese interrogante, deberá la Sala determinar si

¿Deben reconocerse a la demandante el daño emergente y el daño a la vida de relación solicitados en la demanda?

¿Debe incrementarse la suma reconocida por concepto de perjuicio moral?

Superado el trámite correspondiente al recurso, corre la oportunidad de resolverlos y a ello se procede con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. De la responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas y del guardián a quien le es atribuible.

Para que se verifique la responsabilidad patrimonial, se requiere que el daño se genere como consecuencia de la acción u omisión del demandado, es decir, que exista vínculo de causalidad (modernamente imputación) entre la conducta humana y el daño. En cuanto al elemento subjetivo o psicológico de la conducta, la necesidad de su valoración se impone en los regímenes subjetivos de responsabilidad, los cuales constituyen, en el ordenamiento jurídico colombiano – de marcada tendencia culpabilista –, la regla general (artículo 2341 del Código Civil).

No obstante, hay eventos excepcionales en que resulta posible prescindir del análisis sobre el carácter culposo del autor, en los cuales se encuentran las situaciones en que en la causación del perjuicio, por ejemplo, aparecen involucrados objetos inanimados empleados en el ejercicio de actividades peligrosas (artículo 2356 del Código Civil). En estos casos, la categoría de la culpabilidad es completamente irrelevante para la determinación de la responsabilidad, razón por la cual la única vía posible de exoneración consiste en la acreditación de una causa extraña, en cualquiera de sus tres modalidades: caso fortuito o fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de un tercero. Al respecto, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:¹

“...a la vera de la responsabilidad civil disciplinada en las normas generales, coexisten regímenes singulares para determinadas categorías, dentro de éstas las atañederas al ejercicio de actividades peligrosas que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños...considerada su aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de ordinario– despliega una persona respecto de otra, su apreciable, intrínseca y objetiva posibilidad de causar un daño” y, por consiguiente, su idoneidad potencial para lesionar los derechos e intereses tutelados por el

¹ Sala de casación civil, sentencia de 18 de septiembre de 2009, Exp. 20001-3103-005-2005-00406-01, M.P. William Namén Vargas.

ordenamiento jurídico, más allá de la diligencia o cuidado exigible y de los parámetros corrientes.

Trátase de actividades dañosas o riesgosas que no se prohíben, por cuya peligrosidad intrínseca o relativa a los medios de trabajo empleados, es decir por los riesgos y peligros que las caracteriza per se disciplina el deber legal de resarcir los daños causados.

Por esta inteligencia, tiene dicho la Corte, los únicos elementos estructurales de esta especie de responsabilidad son el ejercicio de una actividad peligrosa, la causación de un daño y la relación de causalidad entre aquélla y éste, exigiendo tan sólo que el daño pueda imputarse [...] por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas, sin requerir la prueba de la culpa para que surja la obligación de resarcir,... y por ello basta la demostración del daño y el vínculo de causalidad...

La víctima, sólo debe probar el daño y la relación de causalidad con la actividad peligrosa y al autor o agente no le basta probar ausencia de culpa, ni diligencia o cuidado, siéndole menester acreditar plenamente el elemento extraño como causa exclusiva del daño, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero...".

De manera que el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas está sujeto a lineamientos particulares:

"en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le

es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño”².

Ahora bien, el contenido del artículo 2356 del Código Civil es de carácter meramente enunciativo en cuanto a qué actividades comportan un peligro. No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha catalogado ciertas actividades como peligrosas, tales como la distribución de energía eléctrica, la conducción de automotores, el manejo de materiales explosivos, la construcción, entre otras.³ Teniendo en cuenta, naturalmente que con referencia a tales comportamientos o actividades es propio aplicar el régimen de responsabilidad objetiva cuyo factor de imputación es el riesgo.

De otro lado, partiendo de que en la responsabilidad de este cariz normalmente se involucran cosas inanimadas, debe quedar acreditado en el proceso quién es la persona natural o jurídica que tiene la calidad de guardiana de las mismas, pues

“(E)n el fondo, al que tiene el poder de control se le carga y exige el cumplimiento de la obligación de custodia y guarda de la cosa con la cual se causa el perjuicio. Esa guardianía en principio recae en el propietario pero puede desvirtuarla éste si demuestra que transfirió ese poder sobre la cosa a otra persona o si esta le fue arrebatada, porque lo que en últimas está en juego es, más que la guarda jurídica, una especie de obligación de quien material o intelectualmente manipula y se vale de una cosa, que ella no cause perjuicios a terceros. Más, preciso es establecer que todo cuanto viene dicho, referido a las cosas peligrosas, la Corte lo ha venido aplicando con propiedad y a tono con el artículo 2356, a la actividad que con cosas o sin ellas son riesgosas; y así, el guardián de esta se hace responsable de los daños en los términos de tal precepto.”

Recogiendo entonces esta idea ya consolidada en el derecho patrio y ampliándola a otros casos, la Corte viene sosteniendo establemente que:

² Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve (2009), Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01, M.P. William Namen Vargas.

³ *Ibíd.*

"(E)n síntesis, en concepto de "guardián" de la actividad será entonces responsable la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de donde se desprende que, en términos de principio y para llevar a la práctica el régimen de responsabilidad del que se viene hablando, tienen esa condición:

(i) el propietario, si no se ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de su parte, la perdió, razón por la cual enseña la doctrina jurisprudencial que " ... la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener ... ", agregándose a renglón seguido que esa presunción, la inherente a la "guarda de actividad", puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, (..) o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada ... " (G.I. T CXLII, pág. 188).

(ii). Por ende, son también responsables los poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticrética, acreedores pignoratícios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados (mandatarios y depositarios);

(iii). y en fin, se predica que son "guardianes" los detentadores ilegítimos y viciosos, usurpadores en general que sin consideración a la ilicitud de los antecedentes que a eso llevaron, asumen de hecho un poder autónomo de control, dirección y gobierno que, inhibiendo obviamente el ejercicio del que pertenece a los legítimos titulares, a la

vez constituye factor de imputación que resultaría chocante e injusto hacer de lado”⁴

2. De la aplicación limitada del régimen de responsabilidad por el hecho ajeno – su aplicación en los eventos dañosos derivados de los delitos cometidos por los empleados -.

Dos son las normas que principalmente regulan el tema en el Código Civil, los artículos 2347 y 2349. En virtud del primero, *"(T)oda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado"* y, de ahí en más, la norma trae algunos ejemplos, entre los otros: *"los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado"*.

Por su parte, el artículo 2349 regla que

"(L)os empleadores responderán del daño causado por sus trabajadores, con ocasión de servicio prestado por éstos a aquéllos; pero no responderán si se probare o apareciere que en tal ocasión los trabajadores se han comportado de un modo impropio, que los empleadores no tenían medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente; en este caso recaerá toda responsabilidad del daño sobre dichos trabajadores."

Ahora, la primera precisión que sobre lo anterior debe hacerse es de tipo principalístico, porque la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamientos de vieja data, por demás estables a la fecha, ha decantado que cuando se trata del daño causado por el dependiente de una persona natural, la responsabilidad del civilmente responsable se encuadra en los presupuestos de los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, *"y su responsabilidad es por el hecho ajeno; mientras que si se trata del daño*

⁴ Citas hasta aquí son de Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. *Sentencia SC4750 del 31 de octubre de 2018*. Radicación n.º 05001-31-03-014-2011-00112-01. M.P. Margarita Cabello Blanco. Véase también (SC 196-1992 de 4 de junio de 1992, rad. n.º. 3382, G.J. CCXVI, n.º. 2455, págs. 505 y 506. En el mismo sentido, SC del 17 de mayo de 2011, rad. n.º. 2005-00345-0; SC de abril 4 de 2013, rad. n.º. 2002-09414-01; SC4428-2014 de 8 ab 2014, rad. n.º. 11001-31-03-026-2009-00743-01)

*causado por el agente de una persona jurídica, la responsabilidad de la persona jurídica se encuadra en el artículo 2341 del Código Civil, y su responsabilidad es por el hecho propio*⁵.

La segunda precisión que merece el régimen analizado, ya en concreto relacionada con la responsabilidad solidaria que se presume entre los diferentes intervinientes en el ramo de la conducción de vehículos automotores, consiste en que a esa conclusión ha arribado la jurisprudencia a partir de una postura enarbolada sobre la base de protección a las víctimas de los siniestros viales, en el caso del servicio público, a través del análisis de las normas que regulan esa materia. Por tanto, la mentada solidaridad tiene lugar cuando de perjuicios derivados de accidentes de tránsito o circulación se trata, porque es ese precisamente el objeto social de las empresas transportadoras y afiliadoras.⁶

Además, por razones de tan profundo calado dogmático como las anteriores, autorizada doctrina ha considerado que

"en el estado actual de la jurisprudencia colombiana, a las personas jurídicas jamás se les aplica el régimen de la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno. En efecto, hoy se considera que a las personas jurídicas se les aplica el régimen de la responsabilidad directa, probada o presunta según el caso, pues se considera que el hecho del órgano de la persona jurídica es el hecho de esta misma

Así las cosas, en la práctica los principios de la responsabilidad por el hecho ajeno establecidos en los artículos 2347 y siguientes del Código Civil solo se aplican a las personas naturales cuando el directamente responsable no causa el daño en el ejercicio de una actividad peligrosa

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Gaceta Judicial 99, 1962 p. 96.

⁶ Se pueden consultar, entre otras, Sentencia CSJ SC de 24 de agosto de 2009, rad. 2001-01054-01. Sentencia CSJ SC de 26 de agosto de 2010, rad. 2005-00611-01. Sentencia CSJ SC de 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-00042-01. Sentencia CSJ SC de 17 de mayo de 2011, rad. 2005-00345-01. Sentencia CSJ SC de 19 de mayo de 2011, rad. 2006-00273-01. Sentencia CSJ SC de 3 de noviembre de 2011, rad. 2000-00001-01. Sentencia CSJ SC de 25 de julio de 2014, rad. 2006-00315. Sentencia CSJ SC de 15 de septiembre de 2016, rad. 12994. Sentencia CSJ. SC-12994 de 15 de septiembre de 2016. Sentencia SC- 2107 del 12 de junio de 2018 citada en 20 de septiembre de 2019 (Rad. 73001-31-03-001-2014-00034-01. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).

o cuando existiendo esta última, la guarda de la misma no está encabeza del mismo civilmente responsable”

Puestas así las cosas, aunque por regla general los empleadores responden de manera directa por el hecho de los trabajadores, es apenas lógico pensar que ese régimen se aplica en los casos en que los perjuicios se derivan de la responsabilidad en que incurre determinado dependiente, **pero en el ejercicio de las funciones encomendadas por su empleador y que, a la postre, son propias de su objeto social.**

En casos como este, al analizar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad del “tercero civilmente responsable”, en particular el empleador de una persona que fue condenada por cometer el delito de lesiones personales culposas, aclaró que

“la responsabilidad para el civilmente responsable se genera cuando el directamente responsable (trabajador o dependiente) ha causado el daño mientras cumplía una función encomendada, esto es, mientras estaba bajo el cuidado del empleador. Es, entonces, la subordinación y la vigilancia que este debe tener respecto del primero lo que presume la culpa de aquél”.

*(..) Ahora, cuando el daño fue causado en ejercicio de una actividad peligrosa, es preciso determinar bajo la guarda de quién se encontraba ella. De manera que para endilgar la responsabilidad, la víctima habrá de comprobar que el vehículo o el objeto que sirvió de medio para que el directamente responsable causara el daño estaban bajo la guarda del civilmente responsable”*⁹

3. Del perjuicio moral y el daño a la vida de relación – su cuantificación –

⁷ Tamayo Jaramillo, Javier, *Tratado de Responsabilidad Civil*, 2 ed, Bogotá, Legis, 2007, p. 668.

⁸ Cita de la Corte: “Cfr. TAMAYO JARAMILLO, Javier, *Tratado de Responsabilidad Civil*, Tomo I, Legis, segunda reimpresión noviembre de 2007, p. 768 y 769.”

⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. *Sentencia del 2 de mayo de 2012*. Radicado 35489. M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán.

En el ordenamiento jurídico interno no hay norma alguna de que pueda hacerse interpretación para llevar a cabo la tarea de cuantificación de los perjuicios inmateriales, a propósito de lo cual la Corte ha dicho que **(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del 28 de febrero de 2013. Exp. 11001-3103-004-2002-01011-01 M.P. Arturo Solarte Rodríguez.)**

"la cuantificación del perjuicio moral no es asunto que la ley hubiese atribuido al antojo judicial" sino que corresponde a un aspecto de la decisión, por una parte, de suma importancia y, por otra, de "carácter técnico" (Cas. Civ., sentencia del 5 de mayo de 1999, expediente No. 4978), y lo reiteró la Sala en fecha más reciente, al precisar "que, para la valoración del quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador" (Cas. Civ., sentencia del 18 de septiembre de 2009, expediente No. 20001-3103-005-2005-00406-01)

En ese mismo orden, debe tenerse en cuenta que esa cuantificación entonces debe atender a las particularidades del caso concreto, vinculadas especialmente con la magnitud del impacto que el daño tiene en la esfera íntima de la persona¹⁰ **(Sala Civil Corte Suprema de Justicia sentencia de 18 de septiembre de 2009).**

¹⁰ A propósito, sobre el particular, ha señalado la Corte Suprema de Justicia. *"No obstante, "(S)uperadas algunas corrientes adversas y, admitida por esta Corte la reparación del daño moral sin más restricciones para fijar su cuantía que las impuestas por la equidad (ex bono et aequo) conforme al marco concreto de circunstancias fácticas (cas. civ. sentencias de 21 de julio de 1922, XXIX, 220; 22 de agosto de 1924, XXXI, 83), a partir de la sentencia de 27 de septiembre de 1974, es su criterio inalterado, la inaplicabilidad de las normas penales para su tasación, remitiéndose al arbitrium iudicis, naturalmente, ponderado, razonado y coherente según la singularidad, especificación, individuación y magnitud del impacto, por supuesto que las características del daño, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, son variables y el quantum debeat se remite a la valoración del juez", estimando "apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados,*

Entonces, como es prácticamente imposible dar un precio al dolor, considérese que la Corte Suprema de Justicia ha fijado a título de daño moral a favor de los padres y hermanos de la víctima fallecida una cantidad equivalente a \$53.000.000. Esta estimación, para el año en que se dispuso la condena – año 2011- representaba aproximadamente 100 SMLMV (Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 17 de noviembre de 2011).

Del mismo modo, en sentencia de Casación Civil del 9 de noviembre de 2016 (Rad. 11001-31-03-018-2005-00488-01. M.P. Luis Alonso Rico Puerta)¹¹, la Corte reconoció a la demandante por la muerte de su cónyuge una suma de \$60.000.000,00 por concepto de perjuicios morales, es decir, igualmente cercana a 100 SMLMV de ese año 2016. Consideró en esa oportunidad, además,

"(T)al perjuicio, como se sabe, es una especie de daño que incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece, circunstancia que, si bien dificulta su determinación, no puede aparejar el dejar de lado la empresa de tasarlos, tarea que, por lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. 'Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos de carácter externo, como son los

intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador" (cas. civ. sentencia de 18 de septiembre de 2009, exp. 20001-3103-005-2005-00406-01). (Negrillas fuera de texto).

¹¹ Un reajuste similar hizo la Corte en sentencia del 19 de diciembre de 2018 (Rad. 05736318900120040004201 M.P. Margarita Cabello Blanco), al fijar la compensación en \$72.000.000, es decir, 92.16 SMLMV de la época.

que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada ...' (...)

Bajo esos presupuestos, por cuanto sólo quien padece ese dolor subjetivo conoce la intensidad con que se produjo, tal sufrimiento no puede ser comunicado en su verdadera dimensión a nadie más; no obstante, como tal perjuicio no puede quedar sin resarcimiento, es el propio juez quien debe regularlos."

Misma situación impera en materia **del daño a la vida de relación**, porque la suma más alta reconocida por la Corte es probablemente \$140.000.000, dispuesta en un caso en el que esa Corporación reajustó el límite resarcitorio, para compensar a la víctima directa de un accidente de tránsito que sufrió la perturbación funcional de su sistema nervioso central. Ese monto se justificó en que: *"no pueden (...) fijarse o establecerse parámetros generales que en forma mecánica se apliquen a la valoración de tal clase de perjuicio, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deberán ser apreciadas por el juez"*.¹²

Luego, sumas inferiores a esa ha reconocido la jurisprudencia en variados casos, por lo que no existe, tampoco, una tarifa indemnizatoria. En lo que sí hay claridad es que a diferencia del perjuicio moral, esta tipología implica

"la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o

¹² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de diciembre de 2013. Radicado 88001 31 03 001 2002 00099 01. M.P. Ariel Salazar Ramírez

exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar”¹³

Por tanto, debe cuidarse el Juez de no indemnizar doblemente un mismo perjuicio pues, en principio, la indemnización por secuelas físicas *"se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida en condiciones normales"*¹⁴. Empero, en casos excepcionales, la lesión física o la muerte de la víctima directa puede repercutir en la vida de relación suya (en el caso de la lesión) y, también, de las víctimas indirectas, caso en el cual la prueba debe ser contundentemente indicativa de que la cotidianeidad de estas cambió radicalmente a partir del suceso dañoso, se privaron de actividades lúdicas o sociales y, más, que deben afrontarla con dificultades que tienen su origen exclusivo en el daño.

Son así las cosas, porque

"en la actualidad la jurisprudencia tiene decantado que el «daño moral» y el «daño a la vida de relación» son dos manifestaciones separadas de perjuicios inconfundibles para los fines de reparación, pues, mientras el primero se refiere al padecimiento interno del afectado con el hecho dañoso, el último se contrae a las secuelas que éste tenga en el

¹³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Radicado 11001-3103-006-1997-09327-01. M.P. César Julio Valencia Copete.

¹⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de febrero de 2020. Radicado 73001-31-03-004-2012-00279-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

*desenvolvimiento social del lesionado, en vista de los cambios externos en su comportamiento.*¹⁵

Por tanto, aunque la suscrita es del criterio según el cual los únicos perjuicios inmateriales indemnizables son el moral y el daño a la vida de relación¹⁶, la anterior distinción es importante de cara a la prueba del segundo, en tanto que la sola lesión de la víctima directa, muchas veces acompañada de la pérdida de capacidad laboral, permite presumir su causación. En cuanto a las víctimas indirectas, en principio, deberán probar que en efecto han sufrido el perjuicio en su modalidad de daño a la vida de relación, como estrictamente lo ha entendido la jurisprudencia.

En conclusión, para la Sala es absolutamente claro que en materia de perjuicios morales (extrapatrimoniales) no existe tarifa indemnizatoria alguna, y por el contrario, es el Juez quien debe fijar su monto a través de un ejercicio ponderado y juicioso que abarque las condiciones concretas en que se presenta el daño. De ese modo, aunque no con precisión matemática, se puede lograr una reparación o compensación ajustada a los principios de la reparación integral.

CASO CONCRETO PRIMER REPARO

Conforme estableció la Sala desde el planteamiento de los problemas jurídicos, lo primero que debe determinarse es el régimen aplicable a los demandados Luis Fernando Cano Díaz y Automóviles Itagüí S.A.S, en su calidad de propietario y afiliadora del vehículo de servicio público con placas TRD 182, pues en la demanda simplemente se afirmó que ellos debían responder por los perjuicios porque la responsabilidad del señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez se les “extendía”, por virtud de lo preceptuado en el artículo 2347 del Código Civil, esto es, porque este asesinó al señor Jeferson Franco Cardona en momentos para los cuales se encontraba bajo su dependencia y vigilancia con ocasión de un vínculo laboral (acápite llamado “fundamentos de derecho”).

¹⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de diciembre de 2017. Radicado 05001-31-03-005-2008-00497-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

¹⁶ En algunos casos el daño al buen nombre.

Empero, ya a la hora de introducir los reparos concretos y sustentarlos ante este Tribunal, la demandante acudió a conceptos de “guarda o guardián”, “dirección” y “control” propios del régimen de actividades peligrosas ya que finalmente, a su entender, fue la conducción del vehículo con placas TRD 182 la que *“provocó el altercado que terminó con la muerte del occiso”* (fl 3, hecho tercero de la demanda) y, además, ninguno de esos demandados realizó conducta alguna tendiente a evitar que el señor Castañeda Bermúdez llevara consigo armas cortopunzantes en horas laborales.

Visto ese reproche, y bajo las directrices de la regla de derecho ya ofrecida en el aparte considerativo de esta providencia, la Sala advierte con toda franqueza que entender el régimen de responsabilidad de la forma en que lo propone la parte demandante es un completo despropósito, porque esa comprensión encarna irracionales interpretaciones ya suficientemente abandonadas gracias a los estudios sobre el nexo causal, que llevaron al abandono de la causalidad natural o física y que, modernamente, han coadyuvado a la construcción de un régimen en el que se impone la aplicación de juicio de imputación o atribución jurídica de resultados.

En realidad, este tipo de asuntos debe pensarse con una lógica jurídica fundada en los principios que orientan la responsabilidad civil y, sobre todo, en las normas y la jurisprudencia gobernantes para los hechos que deben juzgarse, claro, a partir de una aplicación sistemática del régimen compuesto por todas esas reglas. Por ello es que la Sala Civil de la Corte ha enseñado, con inigualable claridad y estrictez, que

“(A)unque la causalidad natural no puede excluirse por completo del juicio de imputación, hay que tener presente que ella no es absoluta ni constituye todo el proceso de atribución de un hecho a un agente, porque la cualidad de artífice se encuentra prefigurada por una concepción normativa, o sea que cada comportamiento es valorado dentro de un horizonte de conductas que se erige como patrón selectivamente relevante.

Existe una diferencia fundamental entre el principio de causalidad y el de razón suficiente, toda vez que el primero busca el origen material de

un hecho, en tanto que el segundo se pregunta por qué un resultado puede ser atribuido a una acción dentro de un marco de valores preestablecidos. En el primer caso se habla de relaciones causales, en el segundo de explicaciones de razón.”¹⁷

Es que considerar que el propietario de un vehículo, o su afiliador para efectos de la prestación del servicio público de transporte, responde sin limitación alguna por todo daño que cause el conductor en ejercicio o no de la actividad para la que fue contratado, equivaldría a establecer un vínculo indisoluble en el que los primeros mutarían en terceros automáticamente responsables.

A partir de tales consideraciones, con respecto a la cadena causal que llevó a la lamentable muerte del señor Cardona Franco, lo primero que debe afirmarse es que ninguna de las partes, ni siquiera el propio victimario, discutió que en efecto el deceso obedeció a que el señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez le propinó en el pecho una herida mortal con arma cortopunzante aquel desafortunado 10 de julio de 2015. Es más, nadie ha negado que el altercado entre ambos se presentó por un conato de incidente vial, en el que supuestamente el demandado le cerró el paso a la víctima con el vehículo tipo bus portador de las placas TRD 182.

No obstante, entre estar involucrado el conductor de servicio público en una riña con otro actor de la vía mientras cumplía sus funciones laborales y la imputación del resultado dañoso a su empleador o a la afiliadora del vehículo, existe un enorme abismo teórico, probatorio y, realmente, de sentido común. Lo anterior, porque está claro que la desafortunada y fútil muerte del ser querido de la demandante no tuvo relación alguna con la conducción del vehículo tipo bus, por lo que pensar en el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas está fuera de cualquier razonamiento.

Es más, si se aplicara a los hechos el precepto contenido en el artículo 2347 del Código Civil, necesariamente se concluiría que la sociedad demandada no estaría acogida por tal régimen por su simple calidad de persona jurídica, mientras que con respecto al demandado Cano Díaz, y esto pues en gracia de

¹⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. *Sentencia del 30 de septiembre de 2016*. Radicado 05001-31-03-003-2005-00174-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

discusión, la solución del caso sería exactamente la misma que acogió el Juez de primera instancia, en la medida que el último inciso de esa norma es lo suficientemente claro al reglar que *"cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho"*.

Son así las cosas, habida cuenta que el propio autor material del hecho aceptó que se trató de un altercado menor que tuvo un desenlace fatal porque la agresión entre ambos fue subiendo de tono, más fue una conducta deliberada suya la que desplegó para terminar con el altercado valiéndose de un arma cortopunzante que hincó justo en el pecho del fallecido. Es decir, de ninguna manera se trató de un hecho cometido en ejercicio de las labores para las que fue contratado, mucho menos de un incidente vial que deba someterse bajo las reglas de la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, lo cual excluye para el caso considerar a los demandados como guardianes.

Más bien se trató de un delito, que de hecho ya fue debidamente juzgado por la autoridad penal, que el demandado cometió en horas para las que se encontraba en plena jornada laboral, pero de ninguna manera ello hace que la conducta punible fuere cometida por un "empleado en funciones" de Automóviles de Itagüí S.A.S o un dependiente de Luis Fernando Cano Díaz, más tampoco siquiera con ocasión de estas. De ahí en más, los argumentos para atribuir responsabilidad a esos dos demandados desfiguran por completo las normas que gobiernan el caso, y representan una forma de extender una responsabilidad civil que francamente no alcanza hasta donde se ha querido llevar con esta demanda.

Finalmente, resulta evidente que ningún beneficio presta a los intereses de la parte demandante en este punto, el hecho de afirmar que el Juez no aplicó las consecuencias previstas en el artículo 280 del C.G.P, especialmente porque no tuvo por probados los hechos de la demanda o *"sobre los cuales versaron las preguntas asertivas del interrogatorio"*, porque no fueron asertivos en sus respuestas. Lo anterior, porque está claro que la apelación no puede salir victoriosa por las razones dogmáticas antes explicadas que en todo caso hacen insalvable la teoría que se sostiene en la apelación, amén que los demás medios probatorios desvirtúan cualquier "confesión" presunta que de allí se pueda derivar.

CASO CONCRETO SEGUNDO Y TERCER REPARO

El primero de esos reparos se vincula con la negativa de la pretensión enarbolada para el reconocimiento del daño a la vida de relación, puesto que si bien el respetado Juez *a-quo* le encontró subsumido en el perjuicio moral, para la parte demandante se trata de "*dos cosas diametralmente diferentes*", tanto como que un perjuicio afecta la órbita externa y otro la interna. En ese punto, a su juicio, la perito profesional en psicología fue bastante clara en concluir que la demandante se "aisló".

El segundo, por su parte, se vincula con la inconformidad de la demandante en cuanto al monto del perjuicio moral, porque a decir de su apoderado "*hombre, que 50 salarios mínimos vale eso, me parece una suma muy baja en este monto*", dado que se trata de una mujer a la que "*privaron de poder tener una vida con la pareja que ella quería y con la que se entendió*" (reparos concretos en audiencia).

Comenzando con lo relativo al daño a la vida de relación, estima la Sala que en efecto erró el Juzgador al negar el mentado perjuicio cuando la prueba era absolutamente indicativa de que al caso debía dársele una solución diferente, pues si bien el argumento del primer grado es parcialmente válido en tanto sostuvo que no puede indemnizarse dos veces un mismo perjuicio, lo cierto es que se queda corto o desatiende la segunda parte del mismo, cual es que en efecto "*se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida en condiciones normales*"¹⁸, pero sin perjuicio de que en casos excepcionales la muerte de la víctima directa puede repercutir en la vida de relación de las víctimas indirectas.

Claro, no se desconoce de ninguna manera que la prueba en esos eventos debe ser contundentemente indicativa de que la cotidianeidad de la demandante cambió radicalmente a partir del suceso dañoso, se privó de actividades lúdicas o sociales y, más, que debe afrontarla con dificultades cuyo

¹⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de febrero de 2020. Radicado 73001-31-03-004-2012-00279-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

origen está en el daño. En ese punto, dígase desde ya, asiste razón a la apelante en lo que a la valoración de la prueba se refiere porque, de hecho, en casos tan traumáticos como el presente las simples reglas de la experiencia permiten arribar a conclusión diferente a la sostenida por el *a-quo*.

Aunado a ello, con la demanda se aportó el experticio rendido por la señora Yamile Mora Suárez, psicóloga especialista en valoración del daño mental, que verdaderamente ayuda en la tarea de identificar la causación del daño a la vida de relación. Esa profesional en salud mental afirmó que a sus conclusiones llegó a través de la evaluación de la demandante con ayuda de un modelo cognitivo y clínico, mismas que consisten en que pudo constatar que se trata de *"una señora poco social con estados anímicos muy variados, con tendencias a la tristeza y pensamiento consecutivos sobre su futuro y desesperanza aprendida. Le preocupa la soledad emocional y los ingresos para subsistir."*

Agregó que la demandante no presenta antecedentes psiquiátricos, es una mujer tranquila, consciente y orientada pero con pérdida de visiones de vida y futuro con alto grado de negatividad con respecto a sí misma, que la han llevado a presentar frecuentes alteraciones en su sueño, de su ritmo circadiano y su alimentación, amén que "maneja" en exceso la soledad, tal como lo dejó al descubierto la aplicación de la prueba MMPI 2 que arrojó significativos signos clínicos de trastorno de estrés postraumático y trastorno depresivo mayor, alto índice de pérdida de sentido de vida con ideas y tendencias suicidas con afectación de su rol personal y familiar, debido a los cuales se recomienda tratamiento mental para evitar consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.

Entonces, aunque la perito fue bastante clara en su exposición libre, las preguntas realizadas por el señor Juez y la parte demandada ayudan a esclarecer aún más la situación, como quiera que el Funcionario le averiguó por qué tanto se deriva su situación mental de la pérdida de su ser querido?, a lo cual respondió que todo se le volvió cíclico, porque él (Jeferson) le daba la protección que ella no sentía con su familia. *"Ella no tenía conducta de consumo de sustancias psicoactivas, tenía estados anímicos depronto variantes, pero se acentuaron por el evento traumático porque a partir de allí es que aparecieron los signos y síntomas porque tiene un duelo crónico."*

En ese aspecto ahondó la experta para explicar que la demandante en su entorno familiar vivía una marcada relación disfuncional, puesto que su estabilidad estaba con su pareja, *"por lo que cuando pierde su compañero claro que su familia se acerca pero sin relaciones muy afectivas y se volvió un duelo crónico por falta de apoyo de esa familia"*. Y aunque se insinuó por parte del *a-quo* y del apoderado de la parte demandada que el paso del tiempo podía curar esas dolencias, la psicóloga explicó que *"ella tiene esquemas totalmente deteriorados. No cree en ella, no se ve bonita, tiene un discurso negativo. Un trastorno depresivo o postraumático no es cuestión de tiempo, eso no se quita, puede mejorar, pero no se quita sin el acompañamiento de un profesional en psiquiatría."*

Ahora, incluso la perito supo dar una cuenta más o menos acertada de lo que a su juicio es el daño en la vida de relación, más para el caso de la demandante aseguró que a través de la entrevista clínica con preguntas abiertas y la prueba MMPI 2 a nivel clínico realizada por la Universidad San Buenaventura, podía concluir que *"ella maneja una soledad muy alta, las relaciones con su familia no son frecuentes ni buenas. La soledad a nivel familiar es porque se ha desvinculado con la familia y con la muerte de su ser querido no se vincula nuevamente, ya se vuelve un síntoma depresivo y postraumático."*

Por citar un par de ejemplos de pruebas que apoyan esa teoría, además, resáltese que nada diferente argumentaron las señoras Dioselina Arias y Marta Luz Molina Rodríguez, madre y "cuñada" de la demandante, pues la primera de ellas aseguró que la muerte de Jeferson *"nos impactó mucho porque ella dependía de él de un todo y por todo. Ella quedó totalmente desamparada"* y porque, además, fue *"un impacto fuerte, al faltar la pareja que eran bien, salían y él la invitaba a pasear a comer cuando tenían, todavía no ha podido asimilar la situación. Uno nota el cambio de los hijos, era alegre y le gustaba asociarse, ahora es retraída y vive sola. Lo que le digo, ya no es la muchacha alegre que era, se mantiene callada, encerrada como en sí misma, inestable."* (min. 47 declaración)

Por su parte, la segunda testigo que afirmó convivir con un hermano de la demandante desde hace más de 37 años, que de hecho disfrutaba de viajar alguna veces con ella y su pareja fallecida, declaró que *"ella tiene 3 hijos y él*

vivía con todos. Jeferson ocupó muy bien el rol de padre.” Añadió que “ella ha sido mas bien como alejada de su familia, pero sí se le notaba más unión cuando estaba con él, pero después de la muerte sí totalmente se aisló mucho de la familia, ya uno porque iba, pero ella se aisló como un 80 o un 90%.” En conclusión, según su propio criterio, la señora Sendy Milena Gil Arias se sumió en “la soledad, la depresión, se aisló mucho de la familia.”

Valga, para efectos aclaratorios, recordar que las relaciones de las declarantes con la actora no alcanzan para que prospere la tacha de sospecha formulada por la parte demandada, como quiera que el artículo 211 del C.G.P lo que obliga es a valorar con mayor cuidado el testimonio tachado, tal como lo ha hecho la Sala en su sentido más literal y obvio. Por demás,

(...) la Corte ha sostenido que no puede considerarse que un testigo, ligado por vínculos de consanguinidad con una de las partes, 'va a faltar deliberadamente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaración si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana crítica, puede merecer plena credibilidad y con tanta mayor razón si los hechos que relata están respaldados con otras pruebas o al menos con indicios que la hacen verosímil'; que si las personas allegadas a un litigante pueden tener interés en favorecerlo con sus dichos, no puede olvidarse que 'suelen presentarse a menudo conflictos judiciales en los que sus hechos determinantes apenas si son conocidos por las personas vinculadas con los querellantes y por eso son solamente ellos los que naturalmente se encuentran en capacidad de transmitirlos a los administradores de justicia (...)’¹⁹

Así las cosas, es incluso pericial la prueba del daño a la vida de relación en este caso, pues el juicio clínico de la psicóloga permite concluir que la demandante sufrió una evidente afectación de su esfera interna, claro, pero también de su rol social y familiar. Por ello es que la Sala concluye que efectivamente se está ante dos perjuicios absolutamente autónomos, pues por más que quiso la parte demandada hacer ver que la demandante tenía

¹⁹Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. *Sentencia del 31 de agosto de 2010*. Radicado 2001-00224-01 y *sentencia del 31 de julio de 2014*. Radicado nº 11001-31-10-004-2008-01147-01. M.P. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

tres hijos y todos de diferentes padres, lo cierto es que el testimonio de la señora Marta Luz Molina en ese punto es indicativo justamente de que esa fue una de las razones que más se afectó con la muerte del señor Cardona, porque a pesar de tratarse de tres hijos de otros padres, dijo la testigo, asumió muy bien su rol paternal con respecto a ellos.

Lo mismo sucede con las relaciones familiares previas de la demandante, porque el hecho de no vivir las mismas de forma funcional y encontrar su idea de familia únicamente en la pareja con la que convivía, es claramente indicativo de que la muerte de esta le afectó de sobremanera en su esfera interna y externa, porque no ha contado siquiera, según la propia psicóloga que concurrió para sustentar el dictamen aportado con la demanda, con una red de apoyo que le ayude a llevar el proceso de duelo que a esta altura ya es crónico e insoportable sin la supervisión de un profesional.

Son esas razones las que llevan a que la Sala proceda a adicionar y modificar la sentencia apelada. Lo primero, para condenar al demandado Jairo Hernán Castañeda Bermúdez a pagar a la demandante una suma equivalente a **50 SMLMV** a la fecha del pago por concepto de daño a la vida de relación y, lo segundo, para incrementar el perjuicio moral de cara a que ese demandado pague a la demandante una suma equivalente a **100 SMLMV** a la fecha del pago, porque a criterio de la Sala debe elevarse el monto concedido por el *a-quo* ante las especiales condiciones de salud mental en que quedó la demandante después de la muerte de su pareja, amén de que claramente su sufrimiento se incrementa al ver que sus hijos perdieron a esa persona que ocupaba el rol de padre, sin mencionar que esa muerte fue el resultado de una riña menor que en realidad tuvo un desenlace francamente innecesario, producto de la intolerancia y la falta del más mínimo respeto por los demás ciudadanos.

CASO CONCRETO CUARTO REPARO

El último reparo consiste en que *"se niega el daño emergente, cuando a folios 68, 69 y 70 existe prueba documental que fue debidamente decretada"*, donde se sustenta el valor solicitado por concepto de ese perjuicio. Empero, de entrada la Sala observa que esa solicitud de condena se soportó en los pagos que la demandante debió hacer a la psicóloga Yamile Mora Suárez, en

contraprestación al trabajo pericial aportado con la demanda para fundamentar los perjuicios extrapatrimoniales. No obstante, la parte actora pasó por alto que esos conceptos no tuvieron que ser erogados como consecuencia directa del daño, y por el contrario, podrían ser eventualmente tenidos como parte de las costas procesales de concurrir los requisitos para ello.

Lo anterior, porque bien lo dijo el apoderado en su apelación, ese “gasto” lo realizó la demandante para efectos de fundamentar algunos supuestos fácticos en que se basó la demanda, más no se trata de erogaciones realizadas con ocasión del daño mismo o, como se desprende del precepto contenido del artículo 1614 del Código Civil, no se está ante *"la pérdida misma de elementos patrimoniales, (...) erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad."*²⁰

DECISIÓN

Sin más consideraciones, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **ADICIONA** la sentencia de procedencia y fecha indicadas, para **CONDENAR** al señor Jairo Hernán Castañeda Bermúdez a pagar a la señora Sendy Milena Gil Arias una suma equivalente a **50 SMLMV** a la fecha del pago por concepto de daño a la vida de relación. **MODIFICA el NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutive** para **incrementar** la suma concedida por concepto de perjuicio moral, por lo cual el demandado en cita pagará a la demandante una suma equivalente a **100 SMLMV** a la fecha del pago. La sentencia se **CONFIRMA** en lo demás. **Sin Costas** en esta instancia por no aparecer causadas y por la prosperidad apenas parcial del recurso.

La Secretaría deberá enviar copia de esta decisión al Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, doctor Mario Nicolás Cadavid Botero, en respuesta a la solicitud que se elevó para que obre dentro del expediente que contiene la noticia criminal 050016099166202151460.

²⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. *Sentencia del 7 de diciembre de 2017*- Radicado 47001-31-03-002-2002-00068-01. M.P. Margarita Cabello Blanco.

Ejecutoriada la sentencia, devuélvase el expediente a su origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA



JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
MAGISTRADO
Con aclaración de voto



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**e0ccf34b4f71774b8c58af17886e4beca6f9993f00417d6ab46060ac
7f1710d7**

Documento generado en 28/09/2021 09:47:42 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>